

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Apelación de Auto

Rad. 018-2013-00111-01

La Sala Quinta de Decisión Laboral resuelve el recurso de apelación interpuesto por EFICACIA S.A. frente al auto que decidió declarar imprósperas las excepciones previas de “prescripción” y “cosa juzgada” dentro del proceso ordinario laboral adelantado en su contra y de INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., GONZALO ESCOBAR, FERNANDO CORTÉS, EXPERTOS S.A., PROCERVIS S.A., NACIONAL DE SERVICIOS S.A. y NACIONAL DE EMPLEOS S.A. por JORGE ELIÉCER ESPINAL RENDÓN.

ANTECEDENTES

La parte demandante radicó el escrito inicial con el propósito de obtener el reintegro al cargo que venía desempeñando con el correlativo reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, y subsidiariamente, busca la declaratoria de la nulidad del acuerdo transaccional celebrado con Eficacia S.A., el pago de las horas extras y compensatorios, la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización por despido sin justa causa y la diferencia salarial por ser superior para el cargo el salario establecido dentro de Industria Nacional de Gaseosas Indega S.A.

Una vez notificada en debida forma el libelo, Ineficacia S.A. en su condición de demandada, propuso como medio de defensa entre otras, las excepciones previas de “*prescripción*”, “*transacción*” y “*cosa juzgada*” (Págs. 447-449 Archivo 01). La primera, la fundamentó en que como la relación de trabajo que surgió con el demandante finalizó el 30 de septiembre de 2011, dejó transcurrir el término que dispone el artículo 488 del CST, en tanto la notificación personal de la demanda ocurrió el 27 de marzo de 2015. Sobre la segunda, advirtió que con el actor se celebró el 30 de septiembre de 2011 un contrato de transacción a través del cual se daba por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, el que hace tránsito a cosa juzgada, por lo que respecto de lo que se imputa a Ineficacia S.A. es viable declarar probada la excepción.

En la audiencia del artículo 77 del CPTSS celebrada el 17 de noviembre de 2023, la *a quo*, comprendió que las excepciones no estaban llamadas a prosperar. Sobre la prescripción adujo que conforme a lo que establece el artículo 151 del CPTSS las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en 3 años contados desde la exigibilidad de la obligación y que ese término se interrumpe por un lapso igual con el simple reclamo del trabajador y que en este caso, como el contrato de trabajo terminó el 30 de septiembre de 2011 y lo pedido está encaminado al pago de salarios y prestaciones causados con posterioridad al despido y que no todos los conceptos de índole laboral se causan al finalizar el vínculo sino que se va causando en la medida en que se desarrolla el contrato de trabajo, considerando que no es viable dar resolución a esta excepción como previa.

Sobre la cosa juzgada mencionó que si se verifica el contenido de la demanda, justamente lo que se controvierte es la validez del escrito transaccional que se aduce fue obligado el actor a firmar, por lo que adujo que si bien este tipo de negocios jurídicos tienen como consecuencia que hacen tránsito a cosa juzgada, en este asunto por la naturaleza del caso, se hace necesario la decisión judicial respecto de la validez de la transacción, que de paso, permite verificar si cumple con todos los efectos jurídicos que la ley le endilga.

La parte propulsora de las excepciones interpuso recurso de apelación con ataque a esa determinación, aduciendo sobre la prescripción, que las partes

terminaron el contrato el 30 de septiembre de 2011, insistiendo en que se dejaron transcurrir más de 3 años hasta cuando fue notificada la empresa de la demanda. Ya frente a la transacción y la cosa juzgada, las partes señalaron lo que era objeto de la transacción, entre ello lo concerniente a la indemnización para precaver cualquier litigio que se pudiera presentar, declarando a Eficacia a paz y salvo de todo concepto, recalcando que en el proceso no se ataca la transacción como tal pues en la demanda no se alude a algún vicio o actuación que la invalide, además que el numeral octavo expresa sus efectos de cosa juzgada.

La Juez de instancia concedió el recurso de apelación en efecto suspensivo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

A partir del tema objeto de apelación, le corresponde a esta Colegiatura dilucidar si se configuran o no las excepciones de prescripción y cosa juzgada, que den lugar a dar por terminado el proceso.

Al respecto, sea lo primero destacar que esta Sala de decisión es competente para resolver el asunto planteado por lo previsto en el numeral 3° del artículo 65 del CPT y la SS, según el cual, el auto que decide sobre excepciones previas es recurrible vía apelación, atendiendo a que el artículo 32 del CPTSS otorga la posibilidad de ser propuestas como previas tanto la prescripción como la cosa juzgada.

Pues bien, para efectos de resolver la controversia es oportuno en primera medida acudir a la disposición que consagra la consecuencia de la prescripción que se pide sea aplicada, esto es, el artículo 488 del CST que en su tenor literal reza: *“Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de*

prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”.

En el marco de ese precepto, el artículo 151 del CPTSS estipula en lo pertinente que: *“...Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible...”.*

A la luz de esa normativa, se tiene que de la naturaleza de lo pretendido no permite remontarse como fecha de exigibilidad en el 30 de septiembre de 2011, pues tal data corresponde a la de la finalización del vínculo y se busca en este trámite el reconocimiento de salarios y prestaciones causadas ulteriormente, con lo que se da cuenta de una situación que no eleva en tan fácil determinación el momento de exigibilidad que pide la norma previamente transcrita para resolver en este punto procesal la excepción que tiene el carácter de mixta, considerándose que lo cuestionado amerita un análisis más profundo y detallado con base al análisis de todas las probanzas allegadas respecto de las condiciones que pueden rodear el reintegro pedido, debiendo recordarse además que el término trienal no se contabiliza para cuando la demanda logra ser notificada a la parte convocada, sino que logra suspenderse con la interposición de la demanda que en este caso ocurrió el 04 de febrero de 2013, por lo que incluso partiendo del momento en el que el vínculo feneció, ese lapso concedido por el legislador no se dejó transcurrir, siendo visto que no se trata únicamente de acudir a fechas, sino que definir su prosperidad implica todo un estudio juicioso de lo acontecido, pues si se quiere decidir en derecho teniendo en cuenta la relevancia de lo pretendido, debe contarse con la suficiente claridad de lo acontecido para poder entrar a dar finalización o continuidad a esta acción judicial, lo que solo se logra concurriendo a cada medio demostrativo arribado, cuya exploración completa y razonada es viable al momento de proferirse la sentencia y no en la etapa de decisión de excepciones previas donde el examen se hace más limitado y se parte de hechos ciertos cuando realmente están sujetos a discusión por contraposición impuesta desde el escrito de demanda y su respuesta, argumentos que conllevan a la confirmación de la ausencia de prosperidad de la excepción.

Ahora, la configuración de la cosa juzgada se determina entre otras posibilidades cotejando un proceso que ha hecho tránsito a cosa juzgada con otro proceso, para reconocer en ellos una triple identidad: de objeto, cuando ambos versen sobre la misma pretensión; de causa, cuando tengan como sustento los mismos fundamentos o hechos jurídicos; y de partes, que implica la concurrencia al proceso de las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada (artículo 303 del CGP).

Por tanto, para que pueda afirmarse la existencia de este medio exceptivo se exige de manera perentoria y categórica, la presencia de esas tres identidades básicas.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral al ocuparse de esta figura ha anotado:

“La razón de ser de la cosa juzgada está en la necesidad de ponerle fin a los conflictos, impedir su sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida y evitar así la incertidumbre en la vida jurídica. Ella tiene una función o eficacia negativa, como es la prohibición a los jueces para decidir sobre lo ya resuelto, esto es la inmutabilidad, y una función o eficacia positiva, como es la seguridad o definitividad que les otorga a las relaciones jurídicas sobre las que versa la decisión...” (Ver SL1199-2021)

En ese contexto, se tiene que el propósito primigenio de esta figura es evitar mantener indefinidamente en el tiempo la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a un conflicto, y reabrir un debate para resistir decisiones verificadas en otra instancia judicial o dentro de un acuerdo conciliatorio o transaccional, resoluciones que entonces resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias.

De ese modo, es ilustrado por ambas partes que el 30 de septiembre de 2011 celebraron un acuerdo de transacción (Pág.26 Archivo 01), dándose por finalizada la relación laboral y pactando la entrega de la suma de \$14.585.270 *“con el fin de precaver cualquier litigio eventual que pudiera presentarse en razón del desarrollo, terminación de la relación de trabajo, las obligaciones anteriores que hayan podido quedar insolutas como aquellas que pudieran resultar posteriormente, específicamente en cuanto a la naturaleza de los*

pagos recibidos por el trabajador, la aplicación de beneficios extralegales y la forma de terminación del contrato...” . A partir de esa lectura, bien pudiera desprenderse que los contendientes acudieron al instrumento de la transacción a fin de anticiparse a cualquier conflicto que surja por virtud del desarrollo o el finiquito del nexo que los unió y dejar saldadas todas las obligaciones que hayan quedado insolutas lo que envuelve por supuesto, el reintegro perseguido y los emolumentos que tienen la característica de incierto y discutible, como ocurre con el pago de horas extras y compensatorios porque no hay certeza sobre su dimensión y no se ha configurado una consecuencia jurídica, queriendo decir ello, que desde el momento de la suscripción del acuerdo pudo quedar relegada la posibilidad de volver a debatirse en el futuro, el pedimento entre las mismas partes.

Aun con lo previo, a diferencia de lo que expone el recurrente, el hecho once de la demanda (Pág. 10 Archivo 01), deja ver que rodea este trámite el cuestionamiento de ese convenio suscrito, al que se le atribuye fuerza y coacción para su rúbrica, a partir de lo cual se muestra patente que su validez se pone en entredicho, y en ese orden de ideas, hasta tanto no se defina su eficacia cuyo análisis se abordará en el desarrollo de este trámite, mal pudiera pregonarse la imposibilidad de ventilarse el asunto en los estrados judiciales por razón de estar ante un derecho litigioso resuelto por voluntad de las partes, pues de concluirse la intervención de un vicio en el consentimiento, ese convenio perdería toda su valor y desde allí se habilita el camino para abordarse el asunto en sede judicial, aspecto que reprime la prosperidad de la excepción.

En consecuencia, la decisión objeto del recurso será CONFIRMADA, por no encontrar satisfechos los requerimientos para que por medios exceptivos en su carácter de previos se dé cabida a la terminación del proceso en esta etapa procesal.


Se impondrán costas procesales a Ineficacia S.A, las que se fijan en la suma de \$1.160.000.

DECISIÓN:

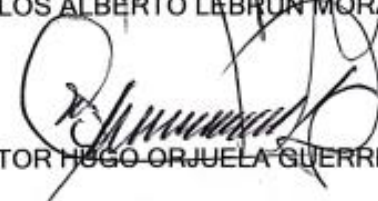
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de fecha y procedencia conocidas. Las costas son como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ).


Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 1 fijados el 11 de enero de 2024, en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.